

La consulta plantea si resulta conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal la comunicación de datos personales de los trabajadores de la consultante a otra empresa, con objeto de que ésta les incluya como partícipes de un programa por el que recibirían regalos, sin que entre ambas empresas exista, al parecer, ningún contrato de prestación de servicios.

I

En primer lugar es preciso considerar que la Estación de servicio consultante está haciendo un tratamiento de datos personales de sus empleados al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999 que señala en su número 1 que “ El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa”, y que este consentimiento no será preciso “cuando los datos se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento” a tenor de lo dispuesto en su número 2, supuesto en el que nos encontramos.

Por otra parte, la consultante tendría la condición de responsable del fichero de sus empleados teniendo en cuenta que el artículo 3 d) de la Ley Orgánica define como tal a “la persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.”

De modo que la consultante ha recabado los datos de sus trabajadores para el correcto desenvolvimiento de la relación laboral con ellos entablada. Partiendo de este hecho, ha de atenderse al principio de calidad de los datos que rige en materia de protección de datos de carácter personal, recogido en el artículo 4 que dice: “1.- Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidades, determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.

2.- Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos.”

Respecto de la interpretación del término “finalidades incompatibles”, la SAN, Sección 1ª, de 17 de marzo de 2004 (rec.641/2001) señala: “Cuando el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999 se refiere a finalidad incompatible está utilizando una expresión inspirada en el artículo 1.b) de la Directiva 95/46, CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, pero la trasposición del término incompatibles resulta confusa y equívoca y como tal ha quedado plasmado en el derecho español. Baste señalar que un dato de carácter personal recabado para una determinada finalidad puede ser indebidamente utilizado para otra actividad diferente que, sin embargo, no sea estrictamente incompatible con aquélla. Aplicando de forma literalista el artículo 4.2 de la Ley Orgánica, quedaría privado de sentido y vaciado de contenido y para evitar este resultado indeseable esta Sala considera que lo que prohíbe el precepto es que los datos de carácter personal se utilicen para una finalidad distinta de aquella para la que han sido recogidos.”

A su vez, el artículo 12 del Real Decreto 1720/2007 señala lo siguiente: “1.El responsable del tratamiento deberá obtener el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales salvo en aquellos supuestos en que el mismo no sea exigible con arreglo a lo dispuesto en las leyes.

La solicitud del consentimiento deberá ir referida a un tratamiento o serie de tratamientos concretos, con delimitación de la finalidad para los que se recaba, así como de las restantes condiciones que concurran en el tratamiento o serie de tratamientos.

2. Cuando se solicite el consentimiento del afectado para la cesión de sus datos, éste deberá ser informado de forma que conozca inequívocamente la finalidad a la que se destinarán los datos respecto de cuya comunicación se solicita el consentimiento y el tipo de actividad desarrollada por el cesionario. En caso contrario el consentimiento será nulo.

3. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba de la existencia del consentimiento del afectado por cualquier medio de prueba admisible en derecho.”

II

En cuanto a la comunicación del nombre y apellidos, sexo, DNI, fecha de alta en la empresa, talla de ropa y número de calzado de los empleados de la Estación de servicio consultante a la empresa que la abandera, Repsol Compañía de Productos Petrolíferos, no cabe duda de que la misma constituye una cesión de datos definida en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica como “toda revelación de datos realizada a persona distinta del interesado.”

Tal cesión debe sujetarse al régimen general de comunicación de datos de carácter personal establecido en el artículo 11 de la Ley, donde se establece que la misma solo puede verificarse para el cumplimiento de fines directamente

relacionados con las funciones legítimas del cedente y cesionario y exige, para que pueda tener lugar (salvo los supuestos exceptuados por el apartado segundo), el previo consentimiento del afectado, otorgado con carácter previo a la cesión y suficientemente informado de la finalidad a que se destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquél a quien se pretenden comunicar (artículo 11.3), y que debe recabar el cedente como responsable del fichero que contiene los datos que se pretenden ceder.

No obstante, el artículo 11.2 dispone que “El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

- a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.
- b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
- c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.
- d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.
- e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.
- f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.”

Teniendo en cuenta lo que se acaba de indicar, la comunicación de datos planteada, requerirá el consentimiento de los interesados a menos que la misma pueda ampararse en alguno de los supuestos excepcionados por el citado artículo 11.2, ninguno de los cuales parece concurrir en el supuesto analizado, pues, si bien el artículo 11.2 c) recoge una excepción a la necesidad del consentimiento previo que se refiere a aquellos supuestos en que el tratamiento y la cesión de datos responda a una libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros y, en este caso, sólo será legítima, en cuanto se limite a la finalidad que la justifique, no parece que el correcto desenvolvimiento y control de la relación laboral de

los empleados con la consultante, necesite o comporte la cesión de sus datos a la empresa Repsol, que abanderará la citada estación de servicio.

Todo ello en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.